

Redacción
 cronica@diarioatacama.cl

La propuesta de los diputados Cristian Tapia y Carlos Bianchi para enfrentar eventuales modificaciones o la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, abrió un amplio debate político y económico, donde las reacciones han puesto el foco en la viabilidad de la medida y sus efectos en la economía. La iniciativa plantea rebajar el impuesto específico a los combustibles y, al mismo tiempo, eliminar exenciones para que las empresas mineras comiencen a pagar este tributo, con el objetivo de evitar alzas significativas en el precio de las gasolinas.

El parlamentario Tapia defendió la propuesta como una medida orientada a amortiguar el impacto directo en la ciudadanía. "Nuestra propuesta obedece a cuidar el bolsillo de la gente de clase media y a la gente de más escasos recursos", afirmó, subrayando que el aumento de los combustibles repercute en múltiples áreas del gasto cotidiano. "Cuando tenemos aumento del precio de los combustibles, no gatilla en las personas que ganan más, gatilla siempre en el precio de la locomoción colectiva, en el precio de los medicamentos", agregó.

IMPACTO FISCAL

Sin embargo, desde el ámbito académico surgieron advertencias respecto a la complejidad de implementar cambios al mecanismo. Nicolás Ro-

Reacciones tensionan a propuesta de diputados por cambios al Mepco

COMBUSTIBLES. Expertos advierten alto costo fiscal y parlamentarios se dividen por eventual impuesto a la minería.



LAS OPINIONES POLÍTICAS ESTÁN MUY DIVIDIDAS.

mán, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, explicó que el Mepco ya implica un alto costo fiscal en contextos de volatilidad internacional.

"Desde el punto de vista económico, reemplazar o complementar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles es altamente complejo", señaló, pre-

cisando que este puede implicar "entre 40 y 60 millones de dólares semanales en contextos de alzas sostenidas". Según indicó, esta dinámica podría traducirse rápidamente en déficit cercano a los mil millones de dólares si factores externos, como conflictos internacionales prolongados, presionan los precios del petróleo.

Respecto a la idea de fi-

nanciar el mecanismo mediante un impuesto específico a las empresas mineras, Román sostuvo que responde a la necesidad de generar ingresos en un contexto donde "nada es gratis", pero advirtió sobre sus implicancias. "Cambios en las reglas del juego, como la introducción de nuevos impuestos, tienden a generar desincentivos a la inversión y pueden afectar la com-

petitividad del sector minero", afirmó.

A su juicio, si bien la lógica de aumentar la carga tributaria a sectores de mayores ingresos aparece como una solución recurrente, también puede traer efectos negativos en el dinamismo económico y en la recaudación futura.

CRUCE POLÍTICO

En el plano político, las reacciones reflejan un escenario de tensión entre oficialismo y oposición. El diputado socialista Juan Santana manifestó su respaldo al enfoque general de la iniciativa, poniendo énfasis en la distribución del costo de las alzas. "Estoy de acuerdo con el concepto detrás de la propuesta, es decir con que el costo de un aumento del precio de los combustibles no lo pague el chileno común, y en su lugar lo asuman quienes más tienen", aclaró.

A esta postura se sumó la diputada Daniella Cicardini, quien cuestionó duramente al Ejecutivo y al manejo fiscal. "El Ministro de Hacienda se

ha transformado en un peligro real para el bolsillo de los chilenos. No podemos permitir que, bajo la excusa de una crisis fiscal, el Gobierno le dé la espalda a la clase media y a los más vulnerables. Amenazar con un alza de 300 pesos en la bencina es una declaración de guerra contra la economía familiar", afirmó. En esa línea, expresó que "si el Ministro no es capaz de estabilizar los precios sin castigar a la gente, entonces no está capacitado para el cargo".

La parlamentaria además abrió espacio a respaldar medidas como la impulsada por Tapia. "Estudiaremos cualquier propuesta alineada al objetivo de que la cuenta de esta emergencia virtual fabricada por el gobierno no la pague la gente, y me parece particularmente interesante y de toda justicia el punto sobre la posibilidad de poner fin a la exención del impuesto específico a las grandes mineras", indicó.

Santana, en tanto, también cuestionó la política fiscal del Ejecutivo, señalando que "me parece una contradicción que el gobierno plante una estrechez fiscal y al mismo tiempo busque rebajar impuestos y afectar directamente la recaudación".

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado republicano Ignacio Urcullú optó por una postura más cauta y evitó pronunciarse en profundidad sobre la iniciativa. "No me voy a referir a lo de Tapia. Aún no hay nada definitivo sobre el tema", señaló, marcando distancia frente a un proyecto que aún no ingresa formalmente a discusión legislativa. **CS**